



Proceso	Verbal
Demandante	Banco Agrario de Colombia S.A.
Demandado	Franklin Edinson Zapata Acevedo
Radicado	No. 05001-31-03-014-2018-00062-01
Procedencia	Juzgado Catorce Civil del Circuito de Oralidad
Instancia	Segunda
Ponente	Luis Enrique Gil Marín
Asunto	Sentencia No. 045
Decisión	Confirma
Tema	Enriquecimiento sin causa cambiario
Subtemas	Elementos del enriquecimiento sin causa. Carga de la prueba. Jurisprudencia de la corte.

TRIBUNAL SUPERIOR

SALA SEGUNDA DE DECISION CIVIL

Medellín (Ant.), nueve de diciembre de dos mil veintiuno

I. OBJETO

Se resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en contra de la sentencia proferida por el **JUZGADO CATORCE CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE MEDELLÍN**, en este proceso verbal instaurado por el **BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.**, en contra del señor **FRANKLIN EDINSON ZAPATA ACEVEDO**.

II. ANTECEDENTES

Pretensiones: El demandante solicita se declare que el demandado se enriqueció sin justa causa a consecuencia de la prescripción de la acción cambiaria que tenía derecho de ejercer del pagaré No. 013036100001587, como consecuencia de su no pago; en consecuencia, se declare la ocurrencia de la disminución del patrimonio de la pretensora que le generó perjuicios materiales como daño emergente y lucro cesante; se condene al demandado a restituir a la pretensora \$100.000.000.00 por capital; \$30.909.00 por intereses remuneratorios desde el 19 de diciembre de 2009 hasta la fecha de presentación de la demanda y \$29.416.6222.00 por intereses de mora desde el 25 de diciembre de 2009 hasta la presentación del libelo genitor. Por último, solicita se condene en costas al extremo pasivo.

Elementos fácticos: Afirma la demandante que el 20 de mayo de 2008, en la ciudad de Medellín, el demandado suscribió el pagaré No. 013036100001587 por \$100.000.000.00, a su favor y desembolsado el 19 de junio de 2008; la obligación se garantizó con hipoteca abierta de primer grado sobre el lote de terreno denominado La Samaria, ubicado en la vereda Insor del Municipio de Cañasgordas, distinguido con la matrícula inmobiliaria No. 006-003926 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cañasgordas – Antioquia; en la demanda que presentó el demandado en contra del Banco Agrario, en el hecho cuarto afirmó que la obligación venció el 24 de diciembre de 2009, porque desde esa fecha cesó el pago de las cuotas adeudadas y de los

intereses, operando el fenómeno de la prescripción; el Juzgado Catorce Civil del Circuito de la ciudad, en el proceso radicado No. 050001-31003-014-2015-00177-00, no acogió la excepción de mérito propuesta y declaró la prescripción extintiva de la acción directa derivada del pagaré No. 013036100001587 y condenó en costas a la demandada; decisión que fue confirmada por el Tribunal Superior de Medellín. El art. 882 del C. de Comercio prevé que si el acreedor deja caducar o prescribir la obligación tendrá acción en contra de quien se haya enriquecido sin causa a consecuencia de la caducidad o prescripción declarada, cuya acción prescribe en el término de un (1) año; en este caso, como la sentencia de primer grado se profirió el 01 de diciembre de 2015 y, la de segundo el 30 de noviembre de 2016, el término legal para incoar la acción de enriquecimiento sin causa no ha vencido; la pretensora ha sufrido disminución patrimonial porque el demandado no pagó la obligación adquirida por \$100.000.000.00, ni los intereses de plazo por \$30.909.00, causados desde el 19 de diciembre de 2009 hasta la fecha de presentación de la demanda; ni los de mora por \$29.416.622,00, ocasionados desde el 25 de diciembre de 2009 hasta la presentación del libelo genitor.

Integración del contradictorio: Admitida la demanda (folios 109 cuaderno principal) y notificada, el demandado no realizó pronunciamiento alguno.

Sentencia anticipada: Se profirió el dieciocho (18) de septiembre de 2019, con la siguiente resolución:

"PRIMERO: DESESTIMA las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

"SEGUNDO: Condenar en costas a la parte demandante y a favor de la demandada. Se fija como agencias en derecho, dos (2) S.M.L.M.V. Líquidense por secretaría según lo dispuesto en el artículo 366 del C.G.P.".

Indica la sentencia que conforme a la jurisprudencia, los elementos constitutivos de la acción de enriquecimiento sin causa, son los siguientes: "1) Que exista un enriquecimiento, es decir, que el obligado haya obtenido una ventaja patrimonial, positiva o negativa. Esto es, no solo en el sentido de adición de algo, sino en el evitar de un patrimonio y, 2) que haya un empobrecimiento correlativo, lo que significa que la ventaja obtenida por el enriquecido haya costado algo al empobrecido, o sea que a expensas de éste se haya efectuado el enriquecimiento"; éstos elementos los debe acreditar la parte demandante en los términos del art. 167 del C. G. del Proceso, debiendo demostrar fehacientemente el incremento patrimonial del demandado, su cuantía, el detrimento de su patrimonio en la misma proporción como consecuencia del precitado aumento y que no tiene otra acción judicial para reestablecer ese desequilibrio injusto; carga probatoria que la pretensora echó de menos dejando de lado que la teología de la acción de enriquecimiento sin causa de los títulos valores, no es la de revivir un instrumento degradado por la prescripción o la caducidad y un negocio subyacente extinguido por las mismas causas, al punto, de exhibirlo como única prueba del enriquecimiento, sin advertir, que dicho

documento ha perdido toda su virtualidad y, por tanto, nada prueba; amén, que la prueba documental allegada solo da cuenta de la obligación que el demandado adquirió con la sociedad demandante y que en virtud del fenómeno jurídico de la prescripción, el accionado no canceló su importe que ascendía a \$100.000.000.00 y que la pretensora indica como el valor del enriquecimiento, sin acreditar el empobrecimiento que padeció, por lo que la pretensión no está llamada a prosperar, al no satisfacer dicho requisito conforme lo ha ordenado la Corte Suprema de Justicia en copiosa jurisprudencia; puesto que el empobrecimiento de la actora debe quedar plenamente demostrado, lo cual no tuvo ocurrencia en el presente caso; por lo que se negarán las pretensiones de la demanda.

Apelación: Lo interpuso la parte demandante y como reparos esgrimió: En virtud de la relación hipotecaria que la vinculó con el demandado, el banco estaba facultado para presentar toda acción judicial para obtener el pago de la obligación; es cierto, que en sentencia del 30 de noviembre de 2016, se declaró la prescripción de la obligación hipotecaria que garantizaba el pago del pagaré No. 013036100001587 por \$100.000.000.00 y que grababa el inmueble distinguido con la matrícula inmobiliaria No. 006-003926; pero, también lo es, que con la demanda se allegaron los sustentos probatorios y fácticos que cumplen con los elementos del enriquecimiento sin causa, porque el banco sufrió un detrimento patrimonial sobre los dineros públicos que entregó al demandado causando un perjuicio y aumento patrimonial a favor de éste por \$100.000.000.00; sin que exista causa jurídica que legitime el enriquecimiento a favor del extremo pasivo y el

empobrecimiento del patrimonio de la demandante; el Banco Agrario de Colombia S.A., es una entidad del Estado y su patrimonio tiene por objeto otorgar créditos al sector agropecuario, velando por el buen manejo de los recursos que son estatales y, por tanto, de carácter público, existiendo un interés general que se debe proteger; en este caso, se presenta un menoscabo a los recursos del Estado, toda vez, que la sociedad actora es de orden público y nacional y los recursos que maneja también lo son; en relación con los elementos constitutivos de la acción de enriquecimiento sin causa, conforme la jurisprudencia, se tiene que al momento de la presentación de la demanda, no se contaba con otra acción para recuperar los dineros objeto del litigio, en virtud de la declaración de prescripción de la acción hipotecaria, que la convirtió en una obligación natural como lo prescribe el art. 1527 del C. Civil; estamos frente a una obligación de hacer y pagar una retribución crediticia a favor de la demandante; en el plenario está probado el incumplimiento del pago, el enriquecimiento injusto y el empobrecimiento correlativo y, como se trata de recursos del Estado, se generó un detrimento al patrimonio público; amén, que la obligación natural a cargo del demandado, aún se mantiene, porque no ha realizado ningún pago. El a quo debió solicitar y decretar las pruebas que considerara necesarias para aclarar y acreditar la existencia de los elementos para la prosperidad de la acción de enriquecimiento sin causa; dadas las condiciones y fin social de la entidad bancaria, la que sufrió un detrimento patrimonial correlativo, afectando los recursos del Estado en \$100.000.000.00, que dio en préstamo al demandado y que para el momento de presentación de la demanda ascendían a \$129.447.531.00.

En segunda instancia, dentro del término del traslado para sustentar el recurso de apelación, volvió sobre lo mismos argumentos esgrimidos al interponer el recurso de alzada y que vienen de sinterizarse.

Por su parte, el demandado no describió el traslado en segunda instancia, pues no hizo ningún pronunciamiento.

III. CONSIDERACIONES

Problema jurídico: El recurso de apelación de cara a la sentencia de primer grado, plantea el siguiente problema jurídico que la Sala debe resolver: ¿están acreditados los elementos axiológicos para la prosperidad de la acción de enriquecimiento sin causa?

El enriquecimiento sin causa: Como la pretensión invocada es la del enriquecimiento sin causa cambiario, es imprescindible abordar esta figura, para determinar si concurren los elementos que la estructuran. Al respecto la Sala de Casación Civil, ha indicado: *"1. El artículo 882 del Estatuto Mercantil, en su inciso final reza: "Si el acreedor deja caducar o prescribir el instrumento, la obligación originaria o fundamental se extinguirá asimismo; no obstante, tendrá acción contra quien se haya enriquecido sin causa a consecuencia de la caducidad o prescripción. Esta acción prescribirá en un año".*

"Elocuente es el citado precepto al otorgarle al "acreedor" del crédito incorporado en un título valor, respecto del cual haya

operado alguno de los fenómenos extintivos en mención, un especial mecanismo judicial que tiene por finalidad atemperar los efectos que hayan impactado su patrimonio, y en esa medida se le permite buscar la restitución del valor económico que represente el empobrecimiento sufrido, a condición de acreditar los requisitos decantados de tiempo atrás por la jurisprudencia.

"2. Sobre el particular, además de los precedentes citados al estudiar los anteriores embates, ilustra acerca de la naturaleza y alcance de la "acción de enriquecimiento cambiario" las argumentaciones de esta Corporación plasmadas en sentencia de 19 de diciembre de 2007 exp. 2001-00101-01 en la que se dijo: "Trátase, pues, de un remedio que está enderezado a reclamar por el enriquecimiento injusto del demandado en detrimento del acreedor demandante, derivado de la extinción, por prescripción o caducidad, de la acción cambiaria y la ausencia de la acción causal, pedimento que, precisamente, se circunscribe al monto de esa injustificada atribución patrimonial. Si bien puede inferirse que la aludida acción entraña una peculiar paradoja en cuanto califica como injusta la atribución patrimonial derivada de la prescripción o la caducidad de la acción cambiaria, circunstancias que en todo el ámbito restante del Derecho Privado comportan una causa eficiente y válida de aprovechamiento económico, si bien las cosas podrán percibirse de ese modo, se decía, lo cierto es que las legislaciones contemporáneas, conscientes de la rígida disciplina de la prescripción y, particularmente, de la caducidad de los títulos valores, de la cortedad de sus términos y la rigurosidad de sus exigencias formales que obran contra

el tenedor, decidieron, en obsequio al equilibrio, consagrar este último medio de reclamación.

“De ahí que, para concretar sus requisitos medulares deba decirse que su procedencia está supeditada a que: a) el acreedor hubiese dejado caducar o prescribir la acción cambiaria; b) que, justamente por tal razón, se produzca un enriquecimiento del demandado en detrimento del acreedor accionante; y c) que dado el carácter subsidiario de la acción, el demandante no disponga de otra acción, particularmente la causal”. (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 14 de diciembre de 2011, exp. 11001-3103-020-2008-00422-01, M.P. Dra. Ruth Marina Díaz Rueda).

De lo anterior se sigue, que para la prosperidad de la pretensión de enriquecimiento sin causa se tienen que estructurar todos los elementos axiológicos que la Corte en forma reiterada ha señalado, de tal manera, que con uno de ellos que no se cumpla la pretensión está llamado al fracaso.

Descendiendo al presente caso, sin ningún esfuerzo se advierte que como lo coligió el a quo, no se cumple a cabalidad con los requisitos para el enriquecimiento sin causa cambiario, porque la parte demandante no acreditó el empobrecimiento que sufrió ni el correlativo enriquecimiento del demandado; pues como lo señala, la prueba documental arrimada al plenario solo da cuenta del pagaré, la hipoteca que garantizó el mismo y la declaratoria de la prescripción extintiva de la acción cambiaria directa derivada del pagaré No. 0130136100001587; sin aportar elemento de convicción alguno que dé cuenta de manera fehaciente y contundente de

la disminución del patrimonio que sufrió la pretensora, ni del correlativo aumento del patrimonio del demandado, porque para acreditar estos elementos, no basta la mera exhibición de los títulos valores impagados y que fueron declarados prescritos, pues al extremo activo le incumbía la carga de la prueba de tal hecho como lo impone el art. 167 del C. General del Proceso, otrora 177 del C. de Procedimiento Civil. Al respecto, la Corte en la sentencia reseñada líneas atrás, precisó: *"6. El tema de la acreditación de algunos de los aludidos requisitos no ha sido pacífico entre los integrantes de la Sala, no obstante por decisión mayoritaria contenida en sentencia de 06 de abril de 2005 exp. 1997-1955-01, se iteró doctrina anterior, señalando que no obstante haberse dicho "(...) que existe amplia libertad probatoria para la acreditación de los presupuestos de la actio in rem verso cambiaria (G.J. t. CC, pág. 135), también ha sido enfática en señalar que tal carga no se satisface con la mera exhibición del instrumento impagado (G.J. t. CCXXV, pág. 763, y sentencia de 25 de octubre de 2000, exp. 5744, no publicada aún oficialmente), pues su aducción, ciertamente, informa de los aspectos cambiarios específicos que emanan del documento, mas no del perjuicio reclamado, a raíz de un supuesto desequilibrio patrimonial.*

"Expresado con otras palabras, ha comentado la doctrina jurisprudencial que en estos procesos no se busca reactivar una acción cambiaria en aras del pago del importe literal consagrado en el documento, pues sería tanto como "autorizar la furtiva cobranza de un efecto negociable degradado" (G.J. t. CCXXV, pág. 763), sino, ante todo, la verificación de la medida y proporción en que se empobreció el demandante y,

correlativamente, se aprovechó el demandado, de modo que, frente al contenido indeterminado de la pretensión, corresponderá al interesado, conforme a la regla pregonada por el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, probar fehacientemente que de manera cierta y real, que no simplemente conjetural o eventual, hubo un desplazamiento económico, pues, como es sabido, "el perjuicio no se presume más que en los casos expresamente indicados en la ley, de los cuales son ejemplo la cláusula penal y el pacto de arras (...)" (G.J. t. CLV, pág. 120).

"Adicionalmente, en asuntos de esta naturaleza, donde la prueba de suyo exigente, tampoco se puede presumir la existencia y el contenido de la relación causal o subyacente que ha originado la creación o transferencia del instrumento de contenido crediticio – art. 882 C. de Co.-, pues ella debe ser objeto de cabal demostración, así como no es dable desconocer que no siempre que se suscribe un título valor medía un negocio jurídico oneroso, toda vez que podrían celebrarse otros donde impere la gratuidad, como ocurría, verbi gratia, con la figura del favor cambialis prevista por el artículo 639 del Código de Comercio.

"... El accionante en estos casos tiene la carga imperativa de demostrar la pérdida sufrida por él y la ganancia obtenida por la contraparte. (...) Finalmente estaba en el deber de acopiar los medios de convicción necesarios para comprobar los extremos exigidos por la normatividad propia de la actio in rem verso, (...)"

"... En ese sentido se advierte, que para el caso en concreto, el citado presupuesto no queda satisfecho con los pagarés y el contrato de hipoteca, tampoco con la actuación surtida en el proceso ejecutivo con garantía real, porque no otorgan certeza acerca de cómo se refleja fáctica y cuantitativamente el "incremento patrimonial del demandado", pues en principio, tales elementos de juicio sólo revelan que existió una acreencia a favor de la actora y a cargo del demandado, con relación a la cual se declaró prescrita la acción cambiaria".

Lo anterior permite concluir que en este litigio no se estructuran los presupuestos para el enriquecimiento sin causa cambiario, pues ni siquiera se aportó prueba del negocio causal que dio origen al título valor que fue declarado prescrito, que dé cuenta que efectivamente el importe de éste salió del patrimonio de la demandante e ingresó en el del demandado y, de contera, que no se trató de un acto de mera liberalidad, razón suficiente, para que la pretensión no prospere y, por sustracción de materia, sobra el examen de otros tópicos.

Finalmente, se pone de presente que el juzgado de primer grado dictó sentencia anticipada en los términos del art. 278-2 del C. General del Proceso, porque no habían pruebas para practicar; lo que propiamente no es objeto de censura, pues el recurrente solo indica que si las pruebas eran necesarias el juez las tenía que decretar; siendo del caso advertir que la actividad oficiosa del juez no puede suplir la omisión o desidia de las partes, máxime cuando son los protagonistas y sabedores de todas las intimidades y episodios que se presentaron durante el desenvolvimiento de la relación

sustancial que los vincula y, de contera, conocedores de las fuentes o personas que tienen esos datos; lo que implica que los medios de convicción obran en su poder y, por lo mismo, saben quiénes son testigos presenciales de tales hechos que interesan al proceso, siendo los llamados a suministrar la información, los datos necesarios y a solicitar los medios de convicción que estimen eficaces y pertinentes, los que usualmente escapan al juez porque le son desconocidos, salvo cuando obran datos sobre tales circunstancias en el proceso.

Conclusión: Se confirmará la sentencia de primer grado, y se condenará en costas a la parte demandante a favor de la demandada. Como agencias en derecho causadas en segunda instancia se fijará la suma de UN MILLÓN OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS (\$1.817.052,00), que equivale a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes (Acuerdo PSAA16-10554, del 5 de agosto de 2016, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura), que se liquidarán conjuntamente con las de primer grado.

IV. RESOLUCIÓN:

A mérito de lo expuesto, la **SALA SEGUNDA DE DECISIÓN CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

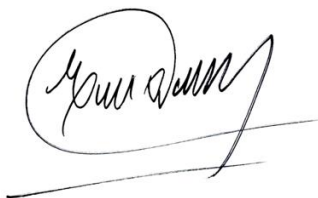
1. Por lo dicho en la parte motiva, se confirma la sentencia de fecha y procedencia indicadas en la parte motiva.

2. Se condena en costas a la parte demandante a favor de la demandada. Como agencias en derecho causadas en segunda instancia se fija la suma de UN MILLÓN OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS (\$1.817.052,00), que equivale a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes (Acuerdo PSAA16-10554, del 5 de agosto de 2016, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura), que se liquidarán conjuntamente con las de primer grado.

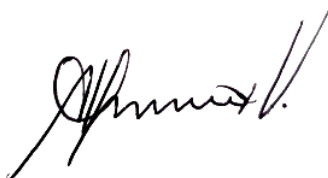
3. Se ordena devolver el expediente al lugar de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados



LUIS ENRIQUE GIL MARÍN



MARTHA CECILIA LEMA VILLADA



RICARDO LEÓN CARVAJAL MARTÍNEZ